



Poder estadístico.

Develando la re-militarización impulsada por las estadísticas en Honduras

DANIEL LANGMEIER*

En este artículo se muestra cómo el gobierno hondureño construyó discursivamente la necesidad de remilitarizar Honduras, con base en una narrativa de inseguridad y la tasa de homicidios, su manifestación más notoria.

El actual régimen, en lugar de introducir los cambios institucionales necesarios para responder a los desafíos de la inseguridad, impulsó la remilitarización de las fuerzas de seguridad pública, cuyo resultado más pregonado —la reducción de la tasa de homicidios— es muy cuestionable.

INTRODUCCIÓN

En 2013 me mudé a una de las ciudades más violentas del mundo, Tegucigalpa¹. Trabajé allí durante casi un año como acompañante de derechos humanos con diferentes visitas a San Pedro Sula, la capital mundial de los asesinatos.

En 2017 regresé por tres meses a Tegucigalpa, mientras tanto, clasificada como la 35 ciudad más violenta del mundo. Aparentemente para ese entonces, su índice de

homicidios se había reducido a la mitad, alcanzando 48 homicidios por cada 100,000 habitantes².

La razón principal de este supuesto éxito, declarada por el gobierno, fueron sus políticas de mano dura basadas en el uso de militares en la seguridad pública. Sin embargo, la vida cotidiana de los y las hondureños, la mía y la de mis colegas no había cambiado, y la inseguridad siguió dominando la convivencia pública.

En este ensayo mostraré cómo el gobierno hondureño construyó discursivamente la necesidad de remilitarizar Honduras, basado en una narrativa de inseguridad y su manifestación más prominente:

la tasa de homicidios. Contrastaré críticamente la narrativa de que el proceso de re-militarización condujo a una tasa de homicidios más baja, pero también cómo se legitimó el proceso en sí mismo y si su resultado retratado es creíble.

Para hacerlo, utilizaré la literatura académica sobre el uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública y otras medidas estadísticas, además de la tasa de homicidios. Este ensayo argumentará que unas estadísticas cuestionables fueron utilizadas selectivamente para impulsar una re-militarización de las fuerzas de seguridad pública en Honduras, contra la oposición nacional e internacional, por un grupo poderoso para su propio beneficio, es decir, para garantizar su permanencia en el poder.

* Estudiante de maestría en el Instituto de Estudios de Desarrollo (IDS) en Brighton, Inglaterra, y miembro del Foro Honduras Suiza.

1 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2015), *Por tercer año consecutivo, San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo*, México: CCSPJP, accesible en <http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1165-por-cuarto-ano-consecutivo-san-pedro-sula-es-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo>

2 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2018), *Metodología del ranking (2017) de las 50 ciudades más violentas del mundo*, México: CCSPJP.

1. HONDURAS Y SUS FUERZAS ARMADAS: UNA BREVE HISTORIA

Para comprender el presente, es esencial conocer el rol de las fuerzas armadas en la historia de Honduras. El ejército siempre ha sido un poderoso actor político en el país, desde su independencia hasta al momento en que se convirtió en la república bananera por excelencia³ y aún hasta el presente.

Seis años después de la independencia, los militares derrocaron al gobierno de Dionisio de Herrera en 1827. Este golpe de Estado fue seguido por decenas más hasta 1982, cuando los regímenes civiles parecieron tomar el poder para siempre⁴. En 2009, al derrocar al presidente Manuel Zelaya, se hizo evidente que la idea de que los militares se habían retirado de la vida pública era un error⁵.

Observando de cerca la literatura pertinente, considerar que los militares se habían retirado de la vida pública en 1982 y que solo reaparecieron en 2009 es en sí misma errónea. El año 1982 fue significativo, al ser eliminada formalmente la figura del ejército de la política pública⁶ en la nueva Constitución.

Pero Mani muestra cómo los militares fueron trasladados a otras

posiciones de poder; por ejemplo, ministerios del gobierno y servicios públicos. Además, la “cultura castrense” subyacente⁷ no había cambiado y con el tiempo, incluso, hubo señales de que el ejército recuperaría más control. En 1998 se creó la Secretaría de Seguridad, encargada de la supervisión de la policía con carácter civil; no obstante, dicha secretaría ha sido dirigida por exmilitares casi en forma continua desde su creación.

Desde esta perspectiva, el golpe en 2009 fue solo la señal más visible de que la desmilitarización nunca se completó. Fue la culminación de un proceso de re-militarización que comenzó poco después del final del gobierno militar oficial en 1982.

Desde 2009, cada acción gubernamental que le otorga más poder a las Fuerzas Armadas debe ser vista como reconocimiento de su papel decisivo en la vida política nacional⁸. El golpe se convirtió en la piedra angular de una renovada relación recíproca entre los poderes políticos y militares.

2. CREANDO Y MANTENIENDO LA NECESIDAD DE UNA RE-MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

La breve descripción histórica intenta establecer la escena en la

que tuvo lugar la remilitarización de la seguridad pública. No solo demuestra que los militares realmente nunca desaparecieron del poder sino que, además, refleja que los eventos en 2009 hicieron que el público nacional e internacional lo supiera también.

Desde entonces, se han realizado esfuerzos para que la remilitarización aparezca como un proceso natural y necesario. En esta sección presento las narraciones usadas para acompañar este desarrollo. Me concentraré en el período que comienza en 2010, cuando Juan Orlando Hernández (JOH) llegó al poder, primero como presidente del Congreso y luego en 2014 como presidente de Honduras.

La violencia siempre ha desempeñado un papel constitutivo en la historia de Honduras⁹, pero luego del golpe de Estado alcanzó nuevos niveles. La tasa de homicidios se duplicó a más de 6000 homicidios entre 2007 y 2010¹⁰. Para 2011, Honduras tenía la tasa de homicidios más alta del mundo¹¹.

Existen múltiples razones para esto: un sistema judicial débil que da como resultado altas tasas de impunidad, un modelo de desarrollo violento, patrones cambiantes de tráfico de drogas, etc¹². El gobierno hondureño, mientras tanto, no tuvo la intención de encontrar res-

3 Acker, A. (1989), *Honduras: The Making of a Banana Republic*, Boston: South End Press.

4 Vélez, A. (2011), “Breve relación histórica de los golpes de estado en Honduras”, accesible en <https://histounahblog.wordpress.com/2011/11/14/golpes-de-estado-en-honduras/>, consultado el 15 de abril de 2018.

5 Salomón, L. (2009), “Políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado”, accesible en <https://www.alainet.org/es/active/31381>, consultado el 22 de octubre de 2017.

6 Mani, K. (2016), “The Armed Forces and the Economy in Latin America: Contemporary Trends and Implications for Civil-Military Relations”, *CMI Working Paper*.

7 Meza, V. (2015), “La remilitarización de la Seguridad Pública en Honduras”, en Meza, V., Orellana, E., Salomón, L., Mejía, T. y Molina, F., *La Militarización de la Seguridad Pública en Honduras*, Tegucigalpa: CEDOH, p. 18.

8 Barahona, M. (2014), “Minorías violentas, oligarquías depravadas. Los orígenes de la violencia en Honduras”, en Mejía Rivera, J. A., Ballesteros, G. y Murillo, J. (coord.), *Violencia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana*, Tegucigalpa: Casa San Ignacio, Editorial Guaymuras, p. 114.

9 *Ibidem*.

10 IUDPAS (2018), Observatorio de la Violencia, Boletín Enero-Diciembre 2017, Tegucigalpa: UNAH.

11 UNODC (2011), *2011 Global Study on Homicide: Trends, Contexts, Data*.

12 Hernández, E. (2016), “San Pedro Sula: de la Capital Industrial a la Capital del Crimen”, en Mejía Rivera, J. A. y Ramos Muslera, E. A. (Coord.), *Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas frente a las violencias: Compartiendo experiencias y visiones*, Tegucigalpa: UNAH, pp. 101-132.

puestas adecuadas a las diferentes causas subyacentes, sino que propuso políticas de mano dura como solución general.

El régimen de JOH creó un discurso militarista que presentaba a las fuerzas armadas como el ejecutor principal de su solución elegida, colocaba a sus representantes en puestos de confianza y los presentaba como la única defensa de la democracia contra sus enemigos¹³. Utilizó la creciente inseguridad simbolizada por el aumento de la tasa de homicidios —exacerbada por las portadas de los periódicos que mostraban cadáveres a diario— como un terreno fértil para este discurso. En lugar de proponer cambios institucionales profundos y apropiados a los desafíos polifacéticos, aprobó medidas de emergencia en línea con su programa de militarización, creando una nueva normalidad¹⁴.

Tras traducir los hallazgos de Bolduc en los EEUU sobre la realidad hondureña, podemos decir que la aparición del narcotráfico ayudó al gobierno a crear su discurso.

Bolduc muestra cómo el tratamiento de todos los actores transnacionales clandestinos como amenazas nacionales estimula la militarización¹⁵. Esto se refleja aún más en el uso, por el gobierno hon-

dureño, del término *terrorista*. Aunque no ha habido ningún ataque terrorista en su historia reciente, adoptó leyes antiterroristas que luego se usan contra los narcotraficantes y las pandillas juveniles, y alarmantemente, también para criminalizar las protestas sociales¹⁶.

Un momento crucial fue la creación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en 2013. Acompañado por un discurso de agentes de policía corruptos¹⁷, JOH la presentó como la principal herramienta para combatir la violencia. Empezó a impulsar la idea como presidente del Congreso y luego construyó su candidatura presidencial alrededor de ella¹⁸. De todos los candidatos presidenciales, él fue el único que se negó a firmar la promesa de impulsar una reforma profunda de las políticas de seguridad de Honduras, promoviendo un modelo de policía comunitaria¹⁹.

Con la creación de la PMOP y la toma de la Presidencia en noviembre de 2013, el discurso comenzó a cambiar. Habiendo garantizado su posición en el poder durante al menos cuatro años, JOH cambió de rumbo para comenzar a promover el presunto éxito de sus políticas de seguridad. Ordenó a la PMOP intervenir las prisiones para exhi-

bir públicamente pistolas, drogas y teléfonos celulares que supuestamente encontraron en el interior de estas²⁰. El gasto en relaciones públicas por las Fuerzas Armadas aumentó exponencialmente; por ejemplo, en 22,900% en diez años en el presupuesto de la Secretaría de Defensa²¹.

El enfoque principal todavía estaba en la tasa de homicidios. Si bien la alta tasa de muertes violentas inicialmente sirvió para preparar el terreno para la re-militarización, su supuesta reducción legitimó el mantenimiento de la presencia militar en la seguridad pública.

JOH comenzó a usar la palestra pública para elogiar a las Fuerzas Armadas, irónicamente incluso a la Fuerza Aérea, por la supuesta reducción de la violencia²². Hasta afirmó que la economía creció gracias a la militarización²³. Esta pantalla de humo discursiva también sirvió para contrarrestar la creciente presión internacional que

13 Mejía Rivera, J. A. (2016), "El discurso militarista y sus efectos de poder", en revista *Envío-Honduras*, Año 14, No. 50: 16-21.

14 Mejía Rivera, J. A. y Zúñiga, J. A. (2016), "La Seguridad Ciudadana como Derecho Humano frente a la militarización del discurso y la práctica", en Mejía Rivera, J. A. y Ramos Muslera, E. A. (Coord.), *Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas...* op. cit., pp. 237-259.

15 Bolduc, N. S. (2016), "Global insecurity: how risk theory gave rise to global police militarization," *Indiana Journal of Global Legal Studies* 23.1: 267-292.

16 *Tiempo* (2017), "Artículo que criminaliza protestas fue aprobado ayer previo a elecciones", accesible en <https://tiempo.hn/aprueban-articulo-que-criminaliza-protestas/>, consultado el 2 de mayo de 2018.

17 Shipley, T. (2016), "'Not a single crack where the light can come in' Civil-military relations in contemporary Honduras", *CM Working Paper*.

18 Carvajal, R.A. (2014), *Violence in Honduras: An Analysis of the Failure in Public Security and the States Response to Criminality*, Monterey, California: Naval Postgraduate School.

19 Meza, V. (2015), "La remilitarización de la Seguridad Pública en Honduras"... op. cit.

20 *La Prensa* (2016), "Militarizan cinco centros penales de Honduras", accesible en <http://www.laprensa.hn/sucesos/1000401-410/militarizan-cinco-centros-penales-de-honduras>, consultado el 2 de mayo de 2018.

21 Carlsen, L. (2017), "Effects of militarization in the name of counter-narcotics efforts and consequences for human rights in Mexico," en Pansters, W. G., Benjamin T. Smith, B. T. y Watt, P., *Beyond the Drug War in Mexico: human rights, the public sphere and justice*, New York: Routledge, p. 83.

22 ConfidencialHN (2018), "JOH felicita a la Fuerza Aérea por 'contribuir' en reducción de la violencia", accesible en <http://confidencialhn.com/2018/04/06/joh-felicita-a-la-fuerza-aerea-por-contribuir-en-reduccion-de-la-violencia/>, consultado el 15 de abril de 2018.

23 ConfidencialHN (2018), "JOH asegura que gracias a militarización creció la economía en Honduras", accesible en <http://confidencialhn.com/2018/04/06/joh-asegura-que-gracias-a-militarizacion-crecio-la-economia-en-honduras/>, consultado el 15 de abril de 2018.

exige la retirada del ejército de la seguridad pública²⁴.

Los elementos discursivos antes mencionados, que promueven la remilitarización de la seguridad pública, fueron acompañados por beneficios más concretos para el ejército. Un ejemplo especialmente preocupante es la Ley de Minería de 2013, que declaró al ejército como socio de empresas mineras, al establecer que el 2% de los impuestos pagados por tales compañías estaría destinado a aquel²⁵. Se estableció al ejército como un socio leal cuya labor, además, sería impulsar el modelo extractivista en Honduras contra la resistencia de la sociedad civil y las organizaciones indígenas.

Similar a la forma en que China siempre parece alcanzar sus metas de crecimiento presentadas en los planes quinquenales, la tasa de homicidios en Honduras parecía disminuir mágicamente al número que JOH presentó como su objetivo a comienzos del año.

En la siguiente sección se analizará la literatura científica sobre el éxito de militarizar la seguridad pública en general, antes de examinar más de cerca el caso hondureño y la credibilidad de estos reclamos de éxito.

24 UPR Info (2018), “UPR Info’s Database of UPR recommendations for and voluntary pledges by Honduras”, accesible en https://www.upr-info.org/database/index.php?limit=0&f_SUR=74&f_SMR=All&order=&orderDir=ASC&orderP=true&f_Issue=All&searchReco=&resultMax=300&response=&action_type=&session=&SuRRgrp=&SuROrg=&SMRRgrp=&SMROrg=&pledges=R ecoOnly, consultado el 4 de mayo de 2018.

25 Meza, D. (2014), “Por ley, policía y ejército son socios de las mineras en Honduras”, accesible en <https://noalamina.org/latinoamerica/honduras/item/12528-por-ley-policia-y-ejercito-son-socios-de-las-mineras-en-honduras>, consultado el 2 de mayo de 2018.

3. LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

3.1. LAS RAZONES

Varios países latinoamericanos experimentaron con la (re) militarización de la seguridad pública en el pasado reciente. Se resaltan dos razones principales para este desarrollo que se encuentran en la literatura: “[L] a incapacidad de los gobiernos para prevenir y controlar eficazmente el delito con políticas adecuadas [y] el debate electoral que destaca la necesidad de una acción directa y rápida”²⁶. Ambos puntos se pueden observar en Honduras, pero la causalidad es menos directa de lo que parece a primera vista.

En cuanto a la cuestión de la incapacidad gubernamental, argumentaré que en el ejemplo hondureño no fue tal incapacidad, sino la falta de voluntad política. Ha habido varias oportunidades en el pasado reciente de Honduras para una profunda reforma de su Policía Nacional.

Un ejemplo prominente fue impulsado por el asesinato de dos estudiantes universitarios por la policía en 2011. Una de sus víctimas era el hijo de Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en aquel tiempo. Ella es una figura pública reconocida y el asesinato de su hijo causó conmoción nacional. La rectora Castellanos presionó por la creación de dos nuevos cuerpos estatales, uno para la depuración de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación y Evaluación de la

26 Dammert, L. (2013) “Militarization of public security in Latin America: where are the police?”, *Calgary Papers*: 116.

Carrera Policial (DIECP), y otro para proponer reformas a la seguridad pública, la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP)²⁷.

Debido a un mandato débil y la falta de apoyo institucional, la DIECP no tuvo éxito en su misión²⁸. La CRSP elaboró planes para un cambio profundo en las políticas de seguridad pública, pero, debido a que se centró en la policía comunitaria, JOH los archivó tan pronto como asumió la presidencia en 2014²⁹.

La falta de voluntad política también se muestra cuando se trata del gasto público. La ONU recomienda 300 policías por cada 100,000 personas, y Honduras solo contaba con 151 en 2013³⁰. En su primer mandato, JOH elevó este número a 156 en 2017³¹. El gobierno hondureño decidió no abordar este problema, sino gastar desproporcionadamente más fondos estatales en 5000 agentes de la Policía Militar. Una organización de derechos humanos estima que el costo por día de un agente de la Policía Militar es de 1000 dólares estadounidenses,

27 Salomón, L. (2015), “La militarización de la Seguridad: Responsabilidad civil, policial... ¿y militar?”, en Meza, V., Orellana, E., Salomón, L., Mejía, T. y Molina, F., *La Militarización de la Seguridad Pública en Honduras*, Tegucigalpa: CEDOH, pp. 73-94.

28 Mejía, T. (2015), “Militarización de la Seguridad Pública en Honduras”, en Meza, V., Orellana, E., Salomón, L., Mejía, T. y Molina, F., *La Militarización... op. cit.*, pp. 95-126.

29 Salomón, L. (2015), “La militarización de la Seguridad: Responsabilidad civil, policial... ¿y militar?”... *op. cit.*

30 Carvajal, R. A. (2014), *Violence in Honduras: An Analysis of the Failure in Public Security... op. cit.*

31 *La Tribuna* (2018), “En 2024 Honduras tendría 300 policías por 100 mil habitantes”, accesible en <http://www.latribuna.hn/2018/04/15/2024-honduras-tendria-300-policias-100-mil-habitantes/>, consultado el 16 de abril de 2018.

un múltiplo del costo de un agente policial normal³².

Dammert presenta los debates electorales sobre la inseguridad como la segunda razón para militarizar la seguridad pública. En Honduras es un hecho que la inseguridad ocupa un lugar destacado en la agenda política y que más seguridad representa una demanda central del pueblo. Como se mencionó anteriormente, incluso JOH construyó toda su campaña presidencial de 2013 en torno de este tema.

Sin embargo, la ciudadanía podía esperar una “acción directa y rápida”³³; también hubo discusiones sobre la policía comunitaria promovida por la CRSP. La estrategia de militarización fue una opción política que de ninguna manera fue sin alternativas.

4.2. ¿ÉXITO O FRACASO?

La literatura sobre la militarización de la seguridad pública en América Latina pone en duda su potencial para mejorar exitosamente la seguridad a largo plazo. El posible éxito a corto plazo tiene un alto costo. En Brasil, la militarización debilitó aún más la democracia³⁴. En el caso de México, Meyer y Seelke encontraron que

no logró reducir significativamente las tasas de criminalidad, mientras que Carlsen demostró que condujo a una “crisis de derechos humanos sin precedentes”³⁵.

Para lograr una solución sostenible, la militarización no parece ayudar y se necesitan otras medidas:

[S]eguridad pública y reformas judiciales que profundicen y fortalezcan los valores democráticos al enfocarse en aumentar la rendición de cuentas, mejorar la efectividad a través de una mejor capacitación y tecnología mejorada, y construir relaciones comunitarias significativas³⁶.

En esta sección examinaré los desarrollos recientes en tres de las áreas mencionadas por Pérez para investigar la veracidad de la reducción de la tasa de homicidio: i) seguridad y reforma judicial, ii) rendición de cuentas y iii) relaciones con la comunidad.

Ya he demostrado en las secciones anteriores que Honduras no ha implementado hasta ahora una profunda reforma de seguridad. Hubo un intento de reforma judicial con la creación de un Consejo de la Judicatura, pero no solo falló la reforma como tal, sino que también sus miembros están enfrentando actualmente cargos judiciales por más de 600 actos de corrupción³⁷.

Entre 2013 y 2017, hubo 2300 femicidios registrados, de los cuales solo 29 casos fueron investigados y solo una investigación condujo a una condena³⁸. La tasa de impunidad es igualmente alta en otros casos, lo cual es una razón de peso para la reforma judicial. Sin embargo, el gobierno hondureño minimizó la importancia de la investigación penal profesional y privilegió la represión³⁹.

Pérez menciona la importancia de aumentar la rendición de cuentas. El gobierno hondureño optó por lo opuesto. Mientras todavía era presidente del Congreso, JOH impulsó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, que entró en vigencia días antes de su toma de posesión como presidente en enero de 2014⁴⁰.

La llamada Ley de Secretos Oficiales le permite al gobierno clasificar cualquier documento que considere relevante para la seguridad nacional por 25 años, sin supervisión independiente. Como consecuencia, los gastos de seguridad se volvieron tan opacos, que “[a]ún los principales especialistas en seguri-

32 Radio Progreso (2015), “Mil dólares diarios le cuesta cada policía militar al pueblo hondureño”, accesible en <http://radioprogreso-hn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1574-%C2%BFsabe-cu%C3%A1nto-le-cuesta-al-estado-hondure%C3%B1o-un-polic%C3%ADa-militar-en-las-calles>, consultado el 4 de mayo de 2018.

33 Dammert, L. (2013) “Militarization of public security in Latin America”... *op. cit.*

34 Zaverucha, J. (2000), “Fragile democracy and the militarization of public safety in Brazil,” *Latin American Perspectives* 27.3: 8–31; Zaverucha, J. (2008), “The «Guaranteeing Law and Order Doctrine» and the Increased Role of the Brazilian Army in Activities of Public Security,” *Nueva Sociedad* 213.1: 1–31.

35 Meyer, P.J. y Seelke, C.R. (2014), *Central America Regional Security initiative: Background and policy issues for Congress*, Washington, D.C.: Congressional Research Service, p. 82.

36 Pérez, O. J. (2003), “Democratic legitimacy and Public insecurity: Crime and democracy in El Salvador and Guatemala”, *Political Science Quarterly* 118.4: 643.

37 *El Libertador* (2018), “Honduras: Exconcejales vuelven a juzgados por 600 delitos de corrupción”, accesible en <http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/>

nacionales/2816-honduras-exconcejales-vuelven-a-juzgados-por-600-delitos-de-corrupcion, consultado el 4 de mayo de 2018.

38 Reporteros de Investigación (2018), “Cinco mil femicidios: Una condena”, accesible <https://reporterosdeinvestigacion.com/2018/04/10/en-cinco-anos-1-sentencia-por-femicidio-y-17-casos-investigados/>, consultado el 11 de abril de 2018.

39 Orellana, E. (2015), “La Militarización de la Seguridad Pública en Honduras”, en Meza, V., Orellana, E., Salomón, L., Mejía, T. y Molina, F., *La Militarización... op. cit.*, pp. 43-72.

40 *La Gaceta* (2014), Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.

dad del país no pudieron identificar adónde iba todo el dinero”⁴¹.

La última área que examinamos en esta sección son las relaciones comunitarias de las fuerzas de seguridad del Estado. La solución más obvia para mejorarlas habría sido construir una fuerza policial comunitaria⁴². Como se mostró, el gobierno optó por ignorar las recomendaciones que van en esta dirección.

Para evaluar la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad pública hondureñas, consulté un sondeo de opinión pública que el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) realiza anualmente y en el que pregunta a las personas encuestadas su punto de vista sobre diferentes temas. Dos preguntas recurrentes son la confianza en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entre 2013 (la primera encuesta disponible) y 2017, el porcentaje de hondureños sin ningún tipo de confianza en la Policía Nacional se mantuvo igual e incluso aumentó ligeramente en el caso de las Fuerzas Armadas⁴³.

Las encuestas también muestran que la inseguridad siguió siendo la principal prioridad de los ciu-

dadanos en los últimos cinco años, cuestionando aún más la veracidad de la supuesta caída en la tasa de homicidios.

4. ¿UNA EXCEPCIÓN HONDUREÑA? EXPANDIENDO EL PANORAMA ESTADÍSTICO

La sección anterior presentó la discrepancia entre lo que la literatura científica tiene que decir sobre la efectividad de la militarización, y la historia de éxito presentada por el gobierno hondureño. Como ya se mostró, su historia se basa principalmente en la tasa de homicidios. En esta sección ampliamos nuestra visión a otras estadísticas que sirven como una prueba más para cuestionar la veracidad de la narrativa dominante del gobierno.

Pero antes, es necesario enfatizar la importancia de esta sección. Incluso si las estadísticas de homicidios fueran confiables —lo que muchos observadores independientes dudan⁴⁴—, las estadísticas presentadas cuestionan el éxito de las políticas públicas aplicadas. Esta sección desafía el enfoque hegemónico promovido por el gobierno sobre la tasa de homicidios y nos llama a tener en cuenta muchas variables cuando investigamos el caso hondureño.

Para ampliar el panorama estadístico, reuní información de varias fuentes sobre diversas variables. Por ejemplo, el número de per-

sonas defensoras de los derechos humanos asesinadas cada año, el número de periodistas asesinados y la posición de Honduras en el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de *The Economist*. La información se remonta a 2006 para permitir la comparación con la situación pre-golpe y anterior a JOH.

El alcance del ensayo no permite un análisis detallado de todas las variables, por lo que solo se plantean las principales observaciones. El primer hallazgo respalda la conclusión extraída de consultar la literatura sobre la militarización; es decir, que la historia de éxito del gobierno se basa en estadísticas de homicidios cuestionables.

El Observatorio Independiente de Derechos de Niños y Jóvenes en Honduras de la organización no gubernamental Casa Alianza encontró que el número de asesinatos de menores de 30 años es un 15% más alto que el número oficial entre 2010 y 2013, e incluso un 30% más entre 2014 y 2017⁴⁵.

Hay otros hallazgos que cuestionan la imagen de una Honduras más segura. El número de activistas LGBTI asesinados aumentó en más del 150% en los cuatro años de la presidencia del Congreso de JOH, en comparación con los cuatro años anteriores, y se mantuvo en un promedio de más de 30 asesinatos por año durante su primer mandato como presidente⁴⁶.

El promedio anual de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos aumentó de 2 a 3 a más de 20 y hasta 33 por año, convirtiendo a Honduras en

41 Kinoshian, S. (2015), “The Law of Secrets: What the Honduran Government Doesn’t Want People to Know”, accesible en <http://lawg.org/action-center/lawg-blog/69-general/1423-the-law-of-secrets-what-the-honduran-government-doesnt-want-people-to-know>.

42 Flores, M. (2016) “Visiones y experiencias de la Policía Comunitaria en Honduras y Nicaragua”, en Mejía Rivera, J. A. y Ramos Muslera, E. A. (Coord.), *Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas...* op. cit., pp. 237-259.

43 ERIC-SJ (2014), *Sondeo de opinión pública. Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2013*, El Progreso; ERIC-SJ (2018), *Sondeo de opinión pública. Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2017*, El Progreso.

44 Beeton, D. y Watts, R. (2016), “No, Honduras Isn’t Necessarily Getting Safer: Despite cheerleading from some, US security aid to Honduras continues to sow violence”, *NACLA Report on the Americas* 48.4: 315–318; Kinoshian, S. (2015) “Honduras’ Military: On the Streets and in the Government”, accesible en <http://securityassistance.org/blog/honduras-military-streets-and-government>, consultado el 4 de mayo de 2018.

45 Casa Alianza (2018), “Informe mensual de la situación de los derechos de las niñas, niños y jóvenes en Honduras”, Tegucigalpa.

46 CONADEH (2018), *Informe Anual 2017*.

el país más peligroso para ser persona defensora, con la tasa más alta de homicidios por habitante⁴⁷. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denuncian la disminución del espacio y margen de maniobra de las personas defensoras⁴⁸. Se puede hacer observaciones similares con el número de abogados y periodistas asesinados.

La posición de Honduras en varios índices internacionales presenta el mismo panorama. El año pasado, el país ocupó la 143^o posición en libertad de prensa, el peor resultado desde el golpe de Estado de 2009⁴⁹. Agravando la situación, en 2017 un número récord de periodistas y comunicadores sociales tuvieron

que huir del país debido a amenazas⁵⁰. Al igual que con la libertad de prensa, Honduras se clasificó peor en 2017 en el Índice de Democracia desde 2009⁵¹.

En cuanto a la corrupción, los índices posicionaron con peor calificación a Honduras en 2017 en comparación con el año 2013, cuando se hizo público el gran escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social⁵².

CONCLUSIÓN

Este ensayo argumenta que el entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, ha utilizado una narrativa de inseguridad para presentar la militarización de la seguridad pública como la única respuesta viable.

Una vez que asumió la presidencia, con una campaña basada en este discurso, cambió de marcha para contar una historia de éxito de un entorno de seguridad mejorado gracias al uso de las Fuerzas Armadas, y basado en el uso selectivo de las estadísticas.

Utilizando la literatura sobre militarización, así como datos adicionales, he demostrado que la historia de éxito presentada es muy cuestionable. Sin embargo, todo este conjunto de medidas, información y uso de números a su favor, permitió a JOH mantener al ejército como su fuerte aliado, lo que ayudó a garantizarle un segundo mandato inconstitucional en noviembre de 2017.

47 Front Line Defenders (2016), *Annual Report 2016 - Stop the Killing of Human Rights Defenders*, Dublin; Front Line Defenders (2017), *Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 2016*, Dublin; Front Line Defenders (2018), *Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 2017*, Dublin; Global Witness (2015), *How many more? 2014's deadly environment: the killing and intimidation of environmental and land activists, with a spotlight on Honduras*; Global Witness (2018), "197 environmental defenders have been killed in 2017", accesible en <https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2017/jul/13/the-defenders-tracker>, consultado el 26 de abril de 2018.

48 Eguigure Borjas, G. y Leissing, A. (2017), "Civil Society Space for Action in Honduras", KOFF Essential: 44; Latin American Working Group (2018), *Between a Wall and a Dangerous Place - The Intersection of Human Rights, Public Security, Corruption & Migration in Honduras and El Salvador*.

49 Reporters without Borders (2018), "Press Freedom Index", accesible en <https://rsf.org/en/ranking>, consultado el 6 de mayo de 2018.

50 Reporteros de Investigación (2018), "15 comunicadores salieron de Honduras en 2017 ante peligro por sus coberturas", accesible en <https://reporterosdeinvestigacion.com/2018/04/24/15-comunicadores-salieron-de-honduras-en-2017-ante-peligro-por-sus-coberturas/>, consultado el 26 de abril de 2018.

51 EIU (2018), *Democracy Index 2017 - Free speech under attack*, Londres.

52 Transparency International (2018), "Corruption perceptions index", accesible en <https://www.transparency.org/research/cpi/overview>, consultado el 6 de mayo de 2018.